

Perdiendo nuestra tierra: La ley agrícola estadounidense de 2002

Peter Rosset y Anuradha Mital.

Codirectores Food First/Institute for Food and Development Policy, EE.UU.

www.foodfirst.org. Traducción de Paulina Novo.

*El hecho de que EE.UU. comercialice por debajo de su costo de producción grandes cantidades de alimentos y productos agropecuarios a todo el mundo, ha llevado a la quiebra a miles de productores agrarios de los países dependientes y atrasados, que no pueden competir en estas condiciones. Los subsidios otorgados por el gobierno al campo estadounidense favorecen a los grandes monopolios productores, en detrimento incluso de los pequeños agricultores norteamericanos. La superproducción de alimentos en EE.UU. ha llevado a que el 25% de los ingresos de los agricultores estadounidenses dependa de las exportaciones y el 40% de las ayudas gubernamentales. Esta situación ha puesto de relieve la hipocresía norteamericana que, al tiempo que exige a países como Colombia eliminar todos los obstáculos a la importación de alimentos, subsidia fuertemente sus propias exportaciones, ocasionando la ruina por doquier. **Deslinde***

El modelo detrás de las políticas

Para entender el famoso «*Farm Bill*» o Ley Agrícola de los Estados Unidos, es necesario entender el modelo que está detrás de las políticas. Desde los pasados años setentas el sistema de agricultura de Estados Unidos se ha ido diseñando para dotar con las herramientas necesarias a los gigantes del comercio de granos y cereales como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill, y ayudarlos a capturar mercados alimenticios nacionales e internacionales. Estas compañías ingresan a los mercados del Tercer Mundo con dos mecanismos estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, trabajan mano a mano con el gobierno de Estados Unidos y con instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para forzar a los países del Tercer Mundo a abrir sus puertas a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, recortando drásticamente sus aranceles y otras protecciones para sus mercados y productores nacionales. Una vez abiertos los mercados, el segundo paso es derrocar la competencia de los agricultores locales, por medio del segundo mecanismo, la política de precios bajos, que de hecho es el verdadero motivo detrás de las leyes agrícolas que se aprueban cada cinco o seis años. Para lograr el objetivo de dominar los mercados de terceros países, necesitan un volumen alto de mercancías a bajos precios, lo cual no les representa ningún problema, ya que les es fácil conseguir granos y cereales a un precio tan bajo que nadie puede competirles. Cada seis años nace una nueva ley agrícola diseñada para reducir los precios a niveles de los costos de producción o, en ocasiones, por debajo de ellos. El propósito de los subsidios que paga el gobierno de Estados Unidos a los agricultores grandes es compensarles los precios bajos con pagos compensatorios, que les permite seguir produciendo.

La Ley Agrícola de 2002

Después de 14 meses de charlas, audiencias, conferencias y deliberaciones, el 13 de mayo de 2002 el presidente Bush firmó la Ley de Seguridad e Inversión Rural («*Farm Bill*» o «Ley Agrícola»). Esta ley, de US\$ 248,6 mil millones, significa un incremento de 80% en los subsidios a la agricultura de Estados Unidos, comparado con la Ley Agrícola de 1996. Tal dinero constituye un gasto que proviene directamente de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses. La ley agrícola anterior, conocida como «Ley de libertad para cultivar», de 1996, pretendía alejar a los agricultores de los sistemas de subsidios y precios suplementarios, que amenazaban con llevar a Estados Unidos a una posición comprometedoramente frente a la violación de los reglamentos de la OMC. Sin embargo, la nueva ley agrícola hará que los contribuyentes desembolsen por lo menos US\$ 190 mil millones en los próximos 10 años. Ello representa un incremento de aproximadamente US\$ 83 mil millones, que serán destinados a los programas actuales, solamente con pequeñas modificaciones. En realidad esta ley constituye un complejo programa que atiende principalmente ocho cultivos: algodón, trigo, maíz, soya, arroz, cebada, avena y sorgo. Estos programas benefician principalmente a los Estados de mayor producción de granos y cereales, que casualmente fueron los Estados sujetos a la polémica electoral en las elecciones bianuales.

El abecé de los pagos contemplados por la Ley Agrícola

La legislación engloba los siguientes tres tipos de pago de subsidios gubernamentales para los agricultores: (1) pagos fijos directos, (2) pagos contracíclicos y (3) préstamos para promociones de mercado. Los pagos contracíclicos tienen como objetivo eliminar la necesidad de un mecanismo de rescate de emergencia cada vez que disminuyen los precios en los mercados internacionales. Son una forma de subsidios retroactivos que entrarán en acción cuando los precios de mercado caigan a determinado nivel. Los pagos directos y contracíclicos no están ligados a la producción -en realidad están vinculados a las áreas cultivadas y a los rendimientos históricos- y se ofrecen aun cuando el productor decida dejar de cultivar sus tierras durante toda la temporada. Se basan en una fórmula matemática que tiene en cuenta las hectáreas cultivadas en años anteriores y el historial de rendimiento de cada finca, de tal manera que siguen ligados, de hecho, aunque encubiertamente, a la productividad.

No todo es negativo

La nueva ley agrícola potencialmente tiene algunas estipulaciones positivas que fue necesario introducir para lograr su aprobación en el Congreso, las cuales incluyen un Programa de Bonos para que las personas de bajos recursos puedan comprar en las ferias de agricultores, un programa para ayudar a los nuevos agricultores y la creación del cargo de subsecretario para los Derechos Civiles dentro del Departamento de Agricultura de EE.UU., y duplica los fondos -de US\$ 2.5 millones a US\$ 5 millones- destinados a un programa de seguridad alimenticia en comunidades locales. Este incluye estampillas de alimentos y reinstala viejos beneficios para el inmigrante adulto que ha vivido en EE.UU. por más de cinco años, sin importar el estado legal de sus hijos, o si son minusválidos. Esta reforma también propone un incremento en el gasto para la conservación de suelos, un incentivo a los agricultores para que mantengan sus tierras en descanso. La reforma constituye un intento para reducir el escurrimiento que contamina los acuíferos y conservar los humedales y zonas ecológicas. Para los activistas ecologistas, 50% del fondo de conservación -es decir US\$ 9 de los US\$ 17,1 mil millones- van a parar a las fincas más grandes, propiedad de los productores más ricos, quienes recibirán US\$ 450 mil en un lapso de seis años. En realidad el potencial de los beneficios de dicha ley no puede

compararse con el grave daño que puede causar. En términos generales la ley perjudicará sustancialmente a los agricultores, familiares, consumidores, contribuyentes de impuestos y al medio ambiente. En pocas palabras, esta reforma le roba al pobre para darle al rico, desestabilizando así las comunidades rurales en todo el mundo y debilitando aún más la seguridad alimenticia global. En el presente documento exploraremos las fallas de esta ley.

Asistencia social para las transnacionales

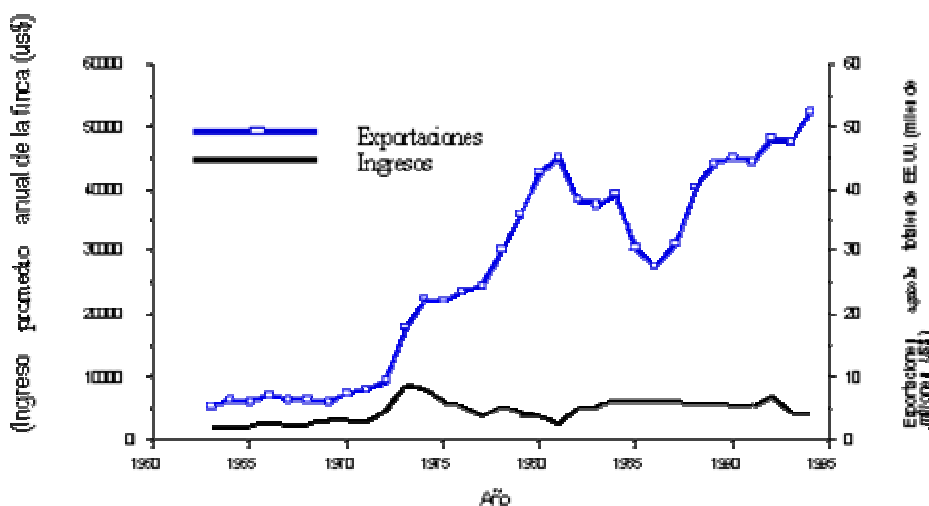
El presidente George Bush argumenta que la Ley Agrícola promoverá la independencia del agricultor, así como la preservación de su forma de vida por varias generaciones. Su lógica es que si ayuda a los agricultores nacionales también beneficiará al resto de la población estadounidense. Empero, si comparamos los años treinta con la situación actual, nos damos cuenta que lo dicho por Bush no tiene sentido. En esos años, 25% de la población era rural (entonces había seis millones de granjas); hoy sólo 2% vive en el campo (ahora hay menos de dos millones de granjas). Las pequeñas fincas han sido casi totalmente remplazadas por las grandes comercializadoras agrícolas. Actualmente 8% de las granjas representan 72% de las ventas, lo que se debe en gran parte a políticas muy similares a las que se enfatizan en esta ley. La mejor descripción de la Ley Agrícola de 2002 es que constituye una forma de asistencia social para las corporaciones transnacionales. La mayoría de los subsidios federales para los cultivos irán a terratenientes ricos, entre ellos a 14 de los diputados que redactaron la ley. Los subsidios se destinarán a corporaciones como Wesbaco (un conglomerado de productos de papel), Chevron, la compañía de seguros de John Hancock y a personas como Ted Turner (director ejecutivo de Time-Warner Entertainment), Dan Donalson (corresponsal del canal ABC de la televisión norteamericana) y al multimillonario David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, mas no a los pequeños y medianos agricultores. Esta ley agrícola sólo redundará en obligar a la mayoría de las familias de agricultores a pagar más impuestos, poniendo en desventaja al pequeño y mediano agricultor.

Que muera el pequeño agricultor

La nueva ley agrícola es una manera más de perder nuestra tierra. Mientras beneficia enormemente a los grandes productores de cultivos de maíz, soya y algodón, perjudica al pequeño agricultor. La reforma ignora todos los temas por los que tanto han luchado los agricultores familiares y movimientos de base, como por ejemplo la prohibición de que las empacadoras de carnes posean ellas mismas ganado, y soslaya un programa de incentivos para proteger el medio ambiente enfocado en los agricultores familiares. A esta reforma le falta sentido común. Por ejemplo, el Congreso y el Senado negociaron que los límites máximos de los pagos a un solo productor fueran elevados a 360 mil dólares en lugar de 250 mil. De hecho, 10% de las personas que reciben estos subsidios agrícolas se llevan las dos terceras partes del dinero, mientras que 80% sólo reciben una sexta parte de los fondos. Lo peor es que 47% de los pagos irán a dar a agricultores con un promedio de 135 mil dólares de ganancias anuales, y cabe añadir que la mayoría de los cultivos no califican para el plan de subsidios. Por ejemplo, en California sólo 9% de los 74 mil agricultores han recibido algún tipo de subsidio desde 1996. Es claro entonces que esta nueva ley agrícola sólo perpetúa injusticias. La mayoría de los «cultivos especiales», como uvas, duraznos, ciruelas, nectarinas, fresas, almendras, nueces y vegetales, que contribuyen con 29 mil millones de dólares a la economía agropecuaria, no recibirán ni un centavo de ayuda. El grueso del dinero se invertirá en ayudar a los productores de arroz, algodón, trigo y

cebada. De 20 productores que recibirán la ayuda, siete son grandes agricultores de algodón y once grandes productores de arroz, los cuales ya reciben un promedio de 596 mil dólares anuales en subsidios. Casualmente, la mayor parte del dinero proveniente de los subsidios se quedará en los Estados donde rigen los legisladores que promulgaron estas leyes. Por ejemplo Iowa, donde reside Tom Harbin, presidente del Comité de Agricultura, recibirá la mayor parte del subsidio: 1,7 mil millones de dólares. Texas, de donde son el representante republicano Larry Combest -quien redactó la propuesta de ley- y el demócrata Charles Stenholm -que integra el Comité de Agricultura del Senado- recibirá 582 millones de dólares anuales, y es el Estado que tendrá el mayor incremento. Si analizamos solamente los últimos cinco años, en Texas 36.200 agricultores obtuvieron 6.6 mil millones de dólares en subsidios mientras que el saldo de 1,1 mil millones se dividió entre los restantes 181 mil pequeños agricultores. Semejante alto nivel de subsidios ha traído consigo una sobreproducción, lo que nos ha llevado a una caída en los precios. Hoy en día más de 40% de los ingresos netos de la agricultura estadounidense proviene del gobierno federal. Lo cual constituye un perfecto incentivo para que aquellos que están buscando la mayor ayuda posible del gobierno siembren cultivos de mayor subvención, utilizando en cada centímetro cuadrado de tierra el mayor número posible de fertilizantes, de hecho mucho más que su uso óptimo en términos agronómicos. El incremento a los subsidios de los agro-negocios sólo acelerará el éxodo de las familias de agricultores del campo, ya que el dinero de los contribuyentes dotará de fondos a los agricultores más fuertes del país, sin dejar ningún margen de competitividad a los agricultores familiares. Como demuestra la Figura 1, durante los años de auge de estas políticas el valor de las agro-exportaciones se ha incrementado en más de 500%, pero el ingreso del agricultor promedio ha caído 50%.

Figura 1. Ingreso por finca de un agricultor estadounidense promedio vs. total de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, 1963-1994.



Fuentes: Farmer income-Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Current and Historic Operator Household Income Tables. Exports-Food and Agriculture Organization, FAOSTAT, Agriculture Data.

Según el presidente de la Coalición Nacional de Agricultores Familiares (NFFC), los que tienen más que perder son los agricultores familiares independientes, que están luchando por salvar sus tierras, así como los contribuyentes de impuestos que son los que estarán subsidiando esta nueva ley, la cual rompe el récord en cuestión de fondos para el subsidio del campo.

Nuevos mercados para las corporaciones estadounidenses

«Los estadounidenses no pueden consumir toda la producción agrícola de los Estados Unidos; por lo tanto tiene más lógica vender más productos al extranjero. Hoy en día, 25% del ingreso de los agricultores de Estados Unidos se genera por medio de las exportaciones, lo que significa que los mercados extranjeros son esenciales para la supervivencia de nuestros agricultores y granjeros. Para ponerlo en términos más simples: lo que queremos es vender nuestra carne, maíz y frijol a las personas alrededor del mundo que necesitan comer.»

Presidente George W. Bush

Dado que los mercados estadounidenses están saturados, Estados Unidos está presionando para abrir nuevos mercados internacionales; con gran éxito, cabe añadir. De hecho, uno de cada tres acres de cultivo de verduras y cereales en EE.UU. se produce con el propósito de exportar, al igual que un cuarto del total de las ventas agropecuarias. Bajo el Programa de Acceso de Mercados de la Ley Agrícola de 2002, un total de 100 millones de dólares ya ha sido distribuido a 67 grupos comerciales estadounidenses con el propósito de promover sus productos agropecuarios en los mercados extranjeros. Adicionalmente, US \$1,34 millones de fondos federales provenientes del Programa de Muestreo de Calidad han sido distribuidos a 17 comercializadoras con el fin de incrementar las exportaciones y permitirles al mismo tiempo expandirse a nuevos mercados agrícolas extranjeros. Toda la propuesta de ley está basada en el mito de que las exportaciones son la única respuesta para salvar al pequeño agricultor americano. Desgraciadamente nos damos cuenta que esto no es cierto, ya que en las últimas dos décadas las exportaciones no han llenado estas expectativas. Los bajos precios de las mercancías han causado un incremento en las ganancias de las procesadoras, exportadoras y compañías de semillas y químicos, y han destruido el modus vivendi de las familias de los agricultores.

Robin Hood invertido

Para la Ley Agrícola no es suficiente proveer asistencia social a las comercializadoras agropecuarias y hacer que los contribuyentes paguen de sus bolsillos estos subsidios, sino que también roba a las personas más pobres del mundo. Por medio del fortalecimiento de las herramientas y la autoridad de instituciones como el Banco Mundial, el FMI y los tratados de libre comercio, Estados Unidos abre mercados internacionales para sus exportaciones presionando a los países pobres para que desprotejan sus mercados, eliminando subsidios y reduciendo tarifas. Por otro lado, Estados Unidos se protege de la competencia extranjera incrementando sus subsidios a nivel nacional y manteniendo sus tarifas. Estos mecanismos han permitido que Estados Unidos inunde los mercados de otros países con su

exceso de mercancías. Ejemplos muy claros son los del maíz y el trigo. EE.UU. exporta maíz a un precio y trigo de 20% y 46% por debajo del costo de producción, respectivamente. Como consecuencia, los productores de maíz de otros países no pueden competir y han tenido que abandonar sus tierras. Más de 80% de las personas pobres en México viven en el campo y más de dos millones son agricultores de maíz. No tienen manera de competir con los agronegocios estadounidenses que han sido subsidiados por el gobierno. Los incrementos en los subsidios agrícolas estadounidenses sólo perjudicarán más la vida de los agricultores del Tercer Mundo. Esta nueva ley estimulará aún más el excedente agrícola nacional, permitiendo que EE.UU. inunde los mercados mundiales a precios por debajo del costo de producción. Consecuentemente, los precios mundiales de los cultivos se depreciarán más, terminando así con los agricultores más débiles y generando un efecto de Robin Hood invertido; esto es, robándole a las personas más pobres del mundo para enriquecer así a los agronegocios estadounidenses. Un ejemplo del efecto Robin Hood invertido es el comercio del algodón, considerado uno de los principales cultivos. Los nuevos subsidios harán que muchos de los productores estadounidenses de algodón, quienes en promedio neto ganan 800 mil dólares anuales, reciban este año del gobierno la mitad de sus ganancias. Hay que tomar en cuenta que sólo una pequeña parte de los agricultores se dedica a la producción de algodón. De dos millones de agricultores, únicamente 25 mil cultivan algodón. Los subsidios que protegen a los agricultores estadounidenses de algodón de la caída de los precios mundiales también traen como consecuencia una continuidad en la producción, aun en tiempos de precios bajos. Esto tiene un efecto negativo en los países del Tercer Mundo, que no cuentan con subsidios, impidiendo su capacidad de subsistir. El año pasado se alcanzó un récord de cultivos de 9,74 mil millones de libras de algodón, incrementando el exceso de producción y deprimiendo aún más los precios por debajo del costo de producción de la mayoría de los agricultores mundiales. Tal situación les ha costado a los países africanos 250 millones de dólares anuales, de acuerdo con un estudio publicado por el Banco Mundial en febrero de 2002. En este estudio el Banco Mundial calcula que la eliminación de los subsidios en Estados Unidos produciría una caída en la producción de algodón dentro de los mismos Estados Unidos, llevando así a un incremento en el precio mundial del algodón. Por otro lado, esto significaría una disminución de ganancias 250 millones de dólares para los países del África central y occidental, lo cual representa una pérdida considerable en las ganancias de estos países. Son evidentes las grandes diferencias entre los productores de algodón en la región del Mississippi en Estados Unidos y los agricultores en la región del Delta en Nigeria. Estados Unidos dice ser el más grande productor de algodón, aunque sea ineficiente y su costo de producción se encuentre muy por encima de otros productores. El occidente de África es el tercer productor mundial de algodón y aun cuando está sujeto a las fuerzas de mercado ha disminuido los precios en 66% desde 1995 a un nivel de 35 a 45 centavos por libra. Gracias a los casi 3,4 miles de millones de dólares en subsidios por parte del gobierno, Estados Unidos se lleva de 70 a 75 centavos por cada libra de algodón. Esta nueva ley agrícola les aumentará los ingresos a los agricultores de algodón estadounidenses en 16%. Al mismo tiempo, en Malí -donde la exportación de algodón constituye la mitad del ingreso de las exportaciones nacionales- el gobierno amenaza que en 2002 habrá una reducción de 10%. La evidencia es tan clara que hasta el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, reconoce que este tipo de subsidios está inhabilitando las pocas oportunidades que tiene África para salir de su pobreza por medio de las exportaciones. Mark Malloch Brown, jefe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ha estimado que los subsidios a la agricultura de Estados Unidos les cuestan a los países más pobres alrededor de 50 mil millones de dólares anuales en pérdidas de ingreso de sus exportaciones agrícolas. Casualmente, esta cantidad es igual al total de ayuda que los países más ricos les dan a los países pobres.

La puerta giratoria entre gobierno e industria

La experiencia con la Ley Agrícola estadounidense nos plantea una pregunta estrechamente relacionada con este tema: ¿A favor de quién se negocian en realidad los acuerdos internacionales sobre el comercio de productos agropecuarios, como la OMC, el TLCAN y el ALCA? El embajador Allen Johnson es el negociador en jefe para la Agricultura en la USTR, Oficina del Representante de Estados Unidos para el Comercio. Como tal, es el encargado de formular y negociar las políticas oficiales del gobierno de Estados Unidos con respecto a temas agrícolas para todos los convenios sobre el comercio internacional. En teoría, el embajador Johnson debe representar a todos los estadounidenses -incluyendo a los agricultores familiares, a los consumidores y a los pobres- en negociaciones tan críticas como las antes mencionadas. Sin embargo, su pasado antes de ingresar a la oficina de la USTR pone en duda si de hecho sirve en temas del comercio agropecuario a todos sus conciudadanos o sólo a la industria privada. Antes de llegar a la USTR, Johnson se desempeñó como presidente y antes como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transformación de Oleaginosos, NOPA en sus siglas en inglés. Según el sitio web de la NOPA (<http://www.nopa.org/>):

«NOPA es una organización dirigida por sus propios miembros, que representa a las industrias estadounidenses de la transformación de las semillas de soya, girasol, canola, lino y alazor. La misión de NOPA es ayudar a estas industrias para que sean las más competitivas y rentables del mundo. NOPA está involucrada de manera proactiva en temas de políticas de comercio internacional, el medio ambiente y la gestión de los recursos naturales, los programas de subvenciones a la producción nacional y los temas de salud y de seguridad. El enfoque de NOPA es facilitar la unidad de toda la industria (p. ej. productores, procesadores y clientes) para alcanzar las metas y enfrentar los retos de la industria oleaginosa.»

NOPA es una organización muy exclusiva. Tiene sólo trece «miembros fijos», que no son personas naturales sino corporaciones. Entre ellas, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Norteamérica y Cargill. Entre los 20 «miembros asociados» se encuentran Conagra, Procter and Gamble, Purina, Tyson Foods y Unilever. Otro miembro fijo es la Perdue. Casi todas las principales transnacionales de comercio de granos están representadas, al igual que algunas de las mayores e importantes empresas transformadoras de alimentos y empresas de producción pecuaria integrada, de estilo «fabricas en el campo». ¿Entonces, de hecho quién está manejando la política comercial de Estados Unidos con respecto a la agricultura? En este contexto, ¿es realmente una sorpresa que las políticas comerciales actuales tengan un efecto devastador para la agricultura familiar, dentro y fuera de EE.UU., y que las nuevas propuestas políticas que actualmente se están negociando dentro de la OMC y el ALCA prometan ser potencialmente peores?

La hipocresía de Bush

Por décadas Estados Unidos ha sido el primero en promulgar el libre comercio, obligando a otros países a que abran sus mercados a productos manufacturados y presionando para que reduzcan los subsidios a su industria agrícola. Sólo hace algunos años, durante la Ronda Uruguay del GATT en los años 90, Estados Unidos ejerció presión para que los demás países redujeran los subsidios a la agricultura. En septiembre de 2001 el gobierno estadounidense apoyó un llamado del Grupo Cairns, poniendo así en riesgo a 18 países agricultores. En este llamado se pidió la eliminación de cualquier

forma de subsidio que afectara el comercio. En el encuentro ministerial de la OMC en Doha, Qatar, en noviembre 2001, Estados Unidos renovó su compromiso antisubsidios. Seis meses después, Estados Unidos incrementó en 80% el subsidio a su sector agrícola. El presidente Bush y la secretaria de Agricultura Ann Veneman declararon que la nueva reforma agrícola no viola los compromisos de Estados Unidos en la OMC. La nueva ley pretende hacer creer que los subsidios se encuentran dentro del límite permitido por los acuerdos de agricultura de la OMC y ha solicitado que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantenga su nivel de subsidios dentro del límite de 19,1 mil millones de dólares, lo cual fue acordado en el calendario de pagos de los acuerdos de agricultura. Esta propuesta también incrementará en 80% el apoyo a los agricultores por medio de los llamados programas de conservación, los cuales los beneficiarán con animales, frutas y vegetales que queden bajo la etiqueta de «caja verde», que son los subsidios permitidos dentro de los acuerdos de agricultura de la OMC. No obstante, Joseph Stiglitz ha descrito la nueva ley como «la perfecta ilustración de la hipocresía en la liberalización de los mercados de la administración de Bush». Dentro de los acuerdos de agricultura (AoA) de la OMC, «la cláusula de paz» (en su artículo 13) dice que hasta finales del año 2003, que es cuando termina el periodo de implementación de los Acuerdos de Agricultura, los apoyos y subsidios no serán partes de las provisiones de la AoA y que las mismas podrán someterse a revisión, lo cual representa una violación de los acuerdos de subsidios y medidas compensatorias de la OMC. En teoría, estas estipulaciones podrían usarse por otros países para demandar a Estados Unidos ante la OMC. Si se tratara de introducir un litigio de este tipo, Estados Unidos debería sustentar su caso para comprobar que su gasto no ha excedido el de 1992. Sin embargo, en 1992 no se les pidió a los miembros de la OMC que reportaran los niveles de apoyo que ofrecieron en 1992. Países industrializados como los de la Unión Europea y Estados Unidos no han proporcionado estas cifras. Por tanto, el prospecto de un litigio contra Estados Unidos es potencialmente un sueño de niños. Esta doble cara de la administración Bush ha ocasionado gran indignación en los países que dependen de sus exportaciones agrícolas. De hecho, varios de ellos han apelado a la OMC y han pedido que se impongan sanciones a Estados Unidos, amenazando con tomar represalias y acusarlo de prácticas hipócritas, ya que mientras toma medidas proteccionistas en su propio país, demanda que otras naciones desprotejan aún más sus mercados. El mismo representante de la Cámara de Comercio estadounidense lo reconoció: «merecemos la crítica que hemos recibido». La nueva ley ha enfurecido a los socios comerciales de Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, se ha concentrado en pelear contra la reforma agrícola por medio de los reglamentos de la OMC y de convenios como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). El premier Lorne Calvert de Saskatchewan ha advertido que si el gobierno federal de Canadá no presta acción y actúa rápidamente en contra de esta Ley Agrícola, la economía agropecuaria canadiense estará en peligro de caer, al punto en donde el país no podrá ni alimentarse a sí mismo. El comisionado de la Unión Europea en Agricultura, Desarrollo Rural y Pescadería, Franz Fischler, hablando de la Ley Agrícola dijo que «esta legislación resalta la falta de credibilidad por parte de las políticas estadounidenses en la OMC, donde Estados Unidos ha presentado una agenda comercial totalmente inconsistente con la nueva ley agrícola. No podemos negociar con la idea de: haz lo que digo y no lo que hago». Los europeos no son los únicos que han lanzado tales críticas a Estados Unidos. También los países del Tercer Mundo están levantados en armas. Por ejemplo, el presidente Museveni, de Uganda, al hablar en la Cámara Americana de Comercio en Washington, denunció que los subsidios de la Ley Agrícola contradicen la misma política de «comercio y de no ayuda financiera» de la administración Bush, ya que sacan del mercado a los países más pobres. Probablemente muy pronto Sudáfrica, que es uno de los países que más ha seguido al pie de la letra las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario

Internacional, y que ha suspendido subsidios a su agricultura, se unirá a las voces de la Unión Europea para quejarse de las acciones de Estados Unidos con respecto a los subsidios agrícolas. El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Lafer, ha amenazado a Estados Unidos diciendo que no dejará de usar ninguno de los recursos a su alcance para anular los efectos negativos de la importación de productos subsidiados estadounidenses. Lafer también ha dicho que interpondrá una queja ante la OMC, ya que la Ley Agrícola perjudicará las exportaciones de Brasil, especialmente las de soya. Brasil ha estimado que perderá 9,6 mil millones de dólares en los siguientes cuatro años, cuando esta ley -que reforzará las exportaciones americanas- entre en vigor. Lo cual causará que Brasil pierda sus mercados y reduzca aún más los precios de sus mercancías agrícolas a nivel mundial. Argentina se ha unido a Brasil en un esfuerzo por buscar la creación de un jurado para determinar la legalidad dentro de las leyes del sistema multilateral de comercio de esta reforma agrícola de Estados Unidos. La indignación es tal que hasta el gobierno chino ha amenazado con tomar represalias.

El libre comercio no es la respuesta

Uno de los mitos divulgados por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea es que en las últimas décadas el libre comercio ha ayudado a los agricultores pobres alrededor del mundo. ¡Y no es así! Lo que sí ha hecho es dejar a los agricultores a merced del libre comercio, acelerando su destrucción. Este enfoque en las exportaciones agrícolas en el comercio mundial se ha traducido en un mayor esfuerzo para maximizar los rendimientos de las cosechas, con los agricultores añadiendo pesticidas y fertilizantes a sus cultivos. Muchos ya no hacen la rotación de cosechas: en cambio utilizan toda su tierra para plantar cultivos subvencionados, como el maíz y el trigo, entre otros, creando así monocultivos que requieren aún más productos químicos, destruyendo nuestra biodiversidad. Al bajar los precios los mercados se saturan de mercancías. La caída de precios en el mercado crea la necesidad de utilizar subsidios para el agricultor, los cuales son ofrecidos solamente a los grandes agricultores y a los agronegocios. Los grandes terratenientes se enriquecen, ya que el precio de la tierra sube y las rentas también, mientras que a los nuevos agricultores no les alcanza ni para comenzar una nueva cosecha. Así se crea una gran burbuja en la economía, la cual inevitablemente se revienta cuando los subsidios no son suficientes para compensar los precios tan bajos del mercado, quedando los agricultores en la bancarrota. La verdad es que esta supuesta ventaja del libre comercio matará de hambre a nuestros agricultores. ¿A fin de cuentas quién pagará por todo esto? La reforma les traerá varias sorpresas a los contribuyentes de Estados Unidos, pero en realidad los que van a pagar el verdadero costo de esta ley agrícola serán los pequeños agricultores familiares alrededor del mundo. Esta tragedia podría causar la desaparición total del pequeño agricultor.

Una oportunidad para el cambio

La Ley Agrícola de 2002 también constituye una oportunidad para que la sociedad civil destruya la hipocresía del mito de la «retórica de desarrollo» del libre comercio. Esta propuesta debe servir como motivación para que la sociedad civil escuche la llamada de la Vía Campesina, el movimiento de campesinos que ha denunciado a la OMC y su liberalización de productos agrícolas, así como las políticas de saturación de mercados por parte de los países desarrollados a los países del Tercer Mundo. Este movimiento campesino no enfatiza el libre comercio sino una producción sustentable, saludable, de buena calidad y culturalmente apropiada para los mercados domésticos, lo que denomina Soberanía Alimentaria. La prioridad de estos campesinos y agricultores es la de producir para sus

familias y comunidades y después buscar acceso a los mercados nacionales antes que buscarlos en el extranjero. Los alimentos y la agricultura son fundamentales para el bienestar de todas las personas en términos de acceso a alimentos nutritivos y confiables. Una buena alimentación constituye el cimiento de cultura, medio ambiente y comunidad saludables. Estos importantes temas han sido completamente socavados por la dependencia en las vagas ideas y promesas del Banco Mundial, el FMI y la OMC. En lugar de asegurar alimentos para todos, estas instituciones han creado prioridades basadas en la producción destinada a las exportaciones, lo que ha incrementado el hambre y la pobreza mundial, privando simultáneamente a millones de agricultores y campesinos de muchos recursos básicos como la tierra, el agua y las semillas. La realidad es que en el contexto de la agricultura el «mercado global» no existe. Lo que existe es un intercambio internacional de un superávit de grano, cereales y carne que ha sido usado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros miembros del mismo clan -como el Grupo Cairns- para saturar los mercados. Detrás de los negociantes de estos tratados están las poderosas corporaciones transnacionales como Cargill y Monsanto, las cuales son las verdaderas beneficiarias de los subsidios domésticos y los tratados internacionales. Es urgente y esencial hacer un cambio fundamental en las leyes de este comercio represivo. La Ley Agrícola se puede considerar como un hecho; empero, también debe visualizarse como una oportunidad para retar al régimen del libre comercio y para renovar el llamado a la OMC de no meterse en los asuntos agrícolas. Los gobiernos tienen que respetar los derechos de todas las personas y su soberanía alimentaria. Es tiempo de que insistamos en que las políticas de comercio de Washington sean políticas sólidas y razonables en lugar de abogar por una supuesta necesidad de mantener el dominio político y comercial estadounidense en el mundo. Ahora las negociaciones sobre la agricultura se están adelantando en preparación para la siguiente reunión ministerial de la OMC en septiembre de 2003, en Cancún, México. Es hora de unirse a la lucha contra un régimen de comercio que perjudica la agricultura y la vida. Una nota final de cautela: es posible que esta Ley Agrícola, en parte sea una táctica de Estados Unidos para la OMC. Al espantar a los países del Sur con el aumento de los subsidios, ahora ofrece reducirlos de nuevo, siempre y cuando los del Sur abran sus mercados aún más. Pero ¡hay que tener cuidado! de morder este anzuelo de «acceso» a los mercados del Norte: hay que abrir los ojos y ver que la meta verdadera de los países del Norte es dominar para siempre los mercados del Sur.

* Este documento está basado en gran parte en *Giving Away the Farm: The 2002 Farm Bill*, por Anuradha Mittal y Peter Rosset, Food First Backgrounder, Volume 8, Number 3, Summer 2002, <http://www.foodfirst.org/pubs/backgrdrs/2002/s02v8n3.html>.

Los pequeños granjeros estadounidenses ganan poco con los subsidios.

Barry James, International Herald Tribune, enero 17, 2003

Según un informe recién dado a conocer por la OCDE, el estimado billón (mil millones) de dólares diarios que los contribuyentes de las naciones ricas pagan en subsidios agrícolas en gran medida acaba en manos de familias que no lo necesitan. Buena parte del respaldo se dirige a personas que no son granjeras. En el peor de los casos, sólo alrededor de una cuarta parte de los subsidios significan una ganancia neta para los hogares rurales, y en el mejor de los casos únicamente la mitad. Los subsidios tienen el efecto perverso de hacer todavía más pobres a muchas familias pobres o expulsarlas definitivamente de la actividad agrícola al aumentar el precio de la tierra por encima de su capacidad adquisitiva. Estos resultados son consistentes con los de otros estudios, incluyendo un informe

elaborado el año pasado por la conservadora Heritage Foundation, donde se descubrió que el grueso de los subsidios agrícolas estadounidenses acababan en poder de las corporaciones y los granjeros grandes, ayudándolos a comprar las parcelas de los granjeros más pequeños. A la misma conclusión llegó un informe anterior del Environmental Working Group, el cual afirma que el 10% de los beneficiarios mejor pagados recogían más del 61% de los ingresos nacionales, con una disparidad todavía mayor en los Estados sureños. Aparentemente, la situación no es mejor en Europa. "Cuando llegué a Bruselas en 1992, el 80% de los subsidios eran monopolizados por el 20% de los granjeros", dice Roger Waite, editor de *Agra Facts*. "En 1992 y 2000 hubo reformas y actualmente la situación no ha cambiado en absoluto; todavía es como la de 1980-2000." El director de coordinación del Comité de Organizaciones Agrícolas de la UE, Dominique Souchon, dijo que sólo era lógico que la mayoría de los subsidios para la producción se orientara hacia los que producían más. "Ellos producen el 80% de los bienes, por eso acaparan el 80% de los subsidios," afirmó. "Tienen las mayores inversiones." Souchon sostuvo que al proveer una oferta segura de alimentos la Política Agrícola Común constituye un buen negocio para los contribuyentes, ya que su costo anual es de alrededor de E40 billones (US \$42 billones), representando sólo el 1% del producto doméstico bruto de la Unión Europea. Pero la producción sobrante tiene que subsidiarse para poder competir en los mercados mundiales, y esto puede tener un impacto desastroso para los productores de los países en vías de desarrollo. En la conferencia mundial sobre el desarrollo sostenible realizada en Johannesburgo el año pasado, la agencia de desarrollo Oxfam presentó un informe en el cual sostiene que "los consumidores europeos están pagando para destruir los medios de subsistencia en algunos de los países más pobres del mundo." P. ej., el informe decía que países de África del sur que pueden producir azúcar a un tercio del precio del azúcar europea son excluidos de los mercados mundiales porque los subsidios a las exportaciones de la UE permiten a los europeos vender sus productos a precios todavía menores. Cuando el año pasado George W. Bush prometió a los granjeros estadounidenses US\$ 190 billones adicionales en los próximos 10 años para cultivar muchos de los productos de los que dependen las naciones en vías de desarrollo, el comisionado de la UE para la agricultura, Franz Fischler, alegó que Bush había minado la credibilidad de las frecuentes declaraciones americanas sobre la necesidad de una reducción global del respaldo para la agricultura. Contestando lo anterior, el gobierno estadounidense dijo que la UE orienta US\$ 5 billones anuales hacia subsidios para las exportaciones, mientras que EE.UU. no gasta más de US\$ 200 millones. Sostuvo que la UE representa el 90% de los subsidios a las exportaciones. Souchon repostó que de una forma u otra, "todo el mundo subsidia. Hay mucha hipocresía al respecto."

Estados Unidos vende maíz, soya, algodón, trigo y arroz por debajo de su costo.

Investigación del Instituto de Políticas de Agricultura y Comercio (IATP); febrero 10, 2003.

Estados Unidos exporta al mundo 5 productos agrarios básicos por debajo de su costo de producción, violando las reglas de la OMC. Los datos oficiales del Departamento de Agricultura de EE.UU. y la OCDE revelan que el maíz, soya, algodón, trigo y arroz son vendidos por debajo de su costo de producción en lo que se conoce como dumping. El dumping se inicia dentro de los mismos EE.UU., con políticas que obligan a los granjeros a vender su producto hasta 40% por debajo de su costo de producción. "El dumping de mercancías en los mercados internacionales perjudica a los granjeros de todo el mundo, incluyendo a los estadounidenses, al presionar hacia abajo el precio de mercado", afirmó Mark Ritchie, presidente del IATP. Existen reglas de comercio internacional para tratar este

problema, pero no se están cumpliendo. En 2001 el dumping del maíz oscilaba entre 25% y 30%, el del trigo 40% y el de la soya casi 30%. O sea que el maíz se vendió en el mercado internacional hasta 30% por debajo de su costo de producción, el algodón hasta 57% y el arroz 20%. La depresión estructural de precios provocada por el dumping agrario desplaza a los productores del campo de sus mercados locales en los países en desarrollo y, en el ámbito internacional, los que intentan exportar encuentran que no pueden competir con los precios de los productos estadounidenses vendidos por debajo de su costo. La crisis padecida por los pequeños productores estadounidenses que han tenido que abandonar las granjas familiares o buscar otros ingresos para mantenerse solventes, revelan las consecuencias producidas en Estados Unidos por las políticas diseñadas para vender productos por debajo de sus costos de producción.
